

CARTAS DEL DIRECTOR

Antonio Abril



No es únicamente el problema de algo más de un centenar de jóvenes que, en estos momentos, sienten como dos instituciones como la Universidad de Alcalá de Henares y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pugnan entre ellas con sus intereses de por medio. Probablemente los más mediatos, los que pasan por saber dónde y cómo van a continuar sus enseñanzas el próximo año, tienen la solución garantizada y de producirse un cambio seguro que les incomodará bastante menos. Porque si al final tienen que continuar sus estudios en Alcalá, ¿acaso el nuevo emplazamiento va a ser peor que el barracón actual que, se mire como se mire, no deja de ser un barracón? Siendo como son la mayoría de estos jóvenes de fuera de Guadalajara, seguro que les resultará mucho más cómodo el desplazamiento sólo hasta Alcalá, en lugar de a Guadalajara. Para aquellos otros intereses que pasan por encontrar el sentido práctico a sus años de formación universitaria, la respuesta viene dada en las cifras del paro que, por desgracia, castigan

Algo más en cuestión

con toda crudeza al colectivo de jóvenes. Sin duda debiera llevarnos al replanteamiento de muchos de los postulados que nos han venido sirviendo hasta ahora.

Pero retomando la línea argumental de esta columna, al margen de los problemas de la UAH –al respecto recomendamos la lectura del artículo “Hombres de Negro, la UAH se hunde” de nuestro compañero Antonio Naranjo, director del Diario de Alcalá, que se publica hoy en el mismo y que también se puede leer en www.dhenares.es– y de los circunstanciales problemas de los alumnos, la posible desaparición de estas dos titulaciones de Guadalajara evidencia otros problemas de mayor calado y que en mi opinión vienen a demostrar que ni unos ni otros, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y UAH creyeron y apostaron decididamente por el proyectado campus del Ruisenñor, más allá de los intereses políticos.

Es evidente que el convenio que en su momento suscribieron ambas instituciones para la pertenencia de Guadalajara a la UAH es, en términos económicos, excelente para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y por supuesto que para los ciudadanos de Guadalajara, como más directos beneficiados. Pero mucho me temo que, en la misma medida, lo es inversamente proporcional para la UAH. Porque en un convenio bilateral cuando una parte sale beneficiada, lo es siempre a cargo de la otra. Basta mirar lo que le cuesta el convenio a la Junta, poco menos de los 6 millones de euros, y compararlo con lo que le cuesta la Universidad de Castilla-La Mancha en el resto de las provincias y que asciende a la cifra de 126 millones de euros. Es decir, más de cinco veces lo mismo por provincia. No es extraño que si además no se cumple y se deja de pagar lo estipulado se trate de tensar la cuerda, incluso sin que importe

mucho si se rompe o no. Si a esto se añade que el *feeling* que existió entre José María Barreda y Virgilio Zapatero es bastante distinto al que hoy puede existir entre Galván y Cospedal o Marcial Marín, no extrañan las circunstancias por las que pasan las actuales relaciones. Aunque, por el contrario, no deja de ser extraño que la UAH haya tardado dos años en plantarse.

En cualquier caso, habría que haber sido un obtuso para no ver los beneficios que la construcción de un campus como el del Ruisenñor puede reportar a Guadalajara, sea éste el emplazamiento, o no, más idóneo. Por eso todos acogimos ecantados dicha posibilidad cuando se planteó hace unos años, a pesar de que ahora hayamos podido comprobar la inviabilidad del proyecto desde casi el mismo momento en que se concibió.

La cuestión es que si Guadalajara deja escapar esas dos titulaciones tal vez sea el comienzo de un camino sin retorno que pone en peligro hasta el mismísimo campus del Ruisenñor. Y lo peor del caso es que hay razones de tipo económico que lo justifican.

FIRMA INVITADA

Pablo Bellido. Secretario general del PSOE de Guadalajara



Si cobran de nosotros, que paguen impuestos aquí

Uno de los principios básicos de la democracia es la elección de representantes entre los conciudadanos, entre aquellas personas que viven y comparten una misma realidad. Parece evidente que, cuando elegimos a alguien para que gestione los colegios a los que enviaremos a nuestros hijos, el médico al que acompañaremos a nuestros padres o la actividad económica de la que esperamos formar parte, lo mínimo que podemos pedirle es que conozca y comparta la realidad que tiene la misión de mejorar.

Sin embargo, este principio básico no se cumple en Castilla-La Mancha. Aquí, tres de cada cinco miembros del Gobierno regional no viven en Castilla-La Mancha, no pagan sus impuestos en Castilla-La Mancha y, por tanto, no sufren los recortes que están imponiendo al resto de los ciudadanos.

Esta no es una cuestión menor. Y no lo es porque significa que quienes han tomado la decisión de aumentar el precio de los combustibles en Castilla-La Mancha con la subida del céntimo sanitario no lo están notando en su bolsillo, porque llenan el depósito de su coche en Madrid. Tampoco sufren el aumento de listas de espera en los hospitales de la región, el cierre de es-

cuelas rurales o la subida de impuestos. No lo sufren porque, a pesar de que los castellano-manchegos les pagamos el sueldo, no han tenido la deferencia de trasladar su domicilio a la tierra que dicen defender. Y sobre todo, no tienen la decencia de pagar sus impuestos en esta comunidad autónoma para contribuir también ellos al esfuerzo que imponen a los demás.

Por tanto, la realidad es que Castilla-La Mancha está gobernada desde fuera de nuestro territorio. Las decisiones son tomadas por un grupo de personas que eluden los recortes impuestos por ellos a todos los demás. Personas a quienes Castilla-La Mancha no les duele, porque ni siquiera quieren a esta tierra lo suficiente como para tributar aquí.

El problema es que María Dolores de Cospedal y los miembros de su Gobierno nos exigen sacrificios que ellos no se aplican. Por ejemplo, nos piden austeridad. Y lo hace una de las políticas mejor pagadas de España que, además, acaba de subir el sueldo a sus directores generales y a sus viceconsejeros. De esta manera, los funcionarios de Castilla-La Mancha cobran un 3% menos gracias a los recortes de Cospedal, mientras los miembros de su Gobierno cobrarán casi 6.000 euros más al año.

No parece que sea mucho pedir a quien cobra de Castilla-La Mancha que pague también en Castilla-La Mancha; que quien representa a esta tierra y tiene la obligación de defenderla, cumpla con sus obligaciones fiscales aquí.

Parece justo también que quienes deciden paralizar las obras de un hospital o eliminar las subvenciones a los centros de atención a la infancia, vivan en sus propias carnes las consecuencias de los recortes que dictan desde un despacho. Y lo dice quien firma: un linense de nacimiento y azudense de adopción, que de ambos sitios es y se siente, que se enorgullece de sus orígenes y también del lugar al que llegó y con el que se comprometió. Porque primero hay que llegar y luego conocer la realidad, quererla y comprometerse para intentar transformarla a mejor.

No se puede representar a alguien desde la distancia, ni mejorar una realidad que uno no vive ni siente. Por eso la propuesta es clara: que todos los altos cargos del Gobierno de Castilla-La Mancha paguen sus impuestos en Castilla-La Mancha. Sería un primer gesto para demostrar algo de cariño a la tierra que están arrasando (a cambio de un sustancioso sueldo, eso sí).